

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Rocío Pineda de Piedrahita
DEMANDADO	Colpensiones
Interviniente	María Yolanda Galeano Ceballos
PROCEDENCIA	Juzgado Diecinueve Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>019 2021 00305 01</b>
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 047 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobreviviente muerte de pensionado. Reclama cónyuge <b>no</b> requisito de pervivencia del vínculo – compañera permanente con convivencia – no se desvirtúa lo establecido en la investigación administrativa
DECISIÓN	Confirma

Hoy, **veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de **Colpensiones**, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta entidad, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Rocío Pineda de Piedrahita**, al que fue integrada como interviniente excluyente la señora **María Yolanda Galeano Ceballos**. Radicado único nacional 05001 3105 **019 2021 00305 01**.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 006**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

## **Antecedentes**

La actora formuló demanda pretendiendo se condene a Colpensiones, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios o en subsidio la indexación y, las costas del proceso.

En sustento de ello, y para lo que interesa a la Sala, afirma que, contrajo matrimonio con el señor Orlando Piedrahita Hincapié, el 17 de julio de 1971, unión de la cual nacieron 4 hijas, quienes en la actualidad son mayores de edad; que ante el fallecimiento de su cónyuge, el 28 de enero de 2021, y al haber sido pensionado, solicitó ante Colpensiones la sustitución de tal prestación, negada en Resolución SUB143169 del 18 de junio de 2021, argumentándose que se debía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a fin de que se dirimiera la controversia entre ella y la señora Yolanda Galeano Ceballos, quien también se presentó a reclamar en calidad de compañera permanente. Que a pesar de que se dio una separación antes del deceso del señor Orlando, permaneció vigente el vínculo matrimonial, adicional a que el fallecido era el soporte económico de la familia.

Mediante providencia del **27 de julio de 2021, se admitió la acción**, y se dispuso la integración de **María Yolanda Galeano Ceballos**, como interviniente excluyente, una vez notificados de la demanda procedieron a allegar pronunciamiento, así:

**Colpensiones,** admite solo lo relativo al contenido del acto administrativo que le negó la prestación, los restantes hechos no le constan. Resistió las pretensiones al carecer de fundamentación fáctica y jurídica, proponiendo como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer sustitución pensional e intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas y, la innominada.

**María Yolanda Galeano Ceballos,** formuló demanda, instando para que se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle de manera exclusiva la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente, los intereses moratorios y, las costas.

Para sustentar su pedimento, afirma que inició convivencia con el señor Orlando el 29 de noviembre de 2008 en el barrio Castilla de Medellín, trasladándose un año después a vivir al Municipio de El Peñol, Antioquia, lugar en el que estuvieron juntos hasta que Orlando, por razón de la pandemia, en el 2020, se trasladó a Medellín, permaneciendo el vínculo, pues, se visitaban mutuamente, hasta el deceso de Orlando el 28 de enero de 2021. Que durante el tiempo de convivencia compartieron lecho, techo y mesa, siendo su beneficiaria en salud, adicional a que este había solicitado el reconocimiento de los incrementos pensionales, concedidos en sentencia del 19 de julio de 2017, por el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Medellín. Que en investigación administrativa se estableció que era la compañera de Orlando y no la señora Rocío Pineda.

En proveído del 10 de mayo de 2022, el despacho de conocimiento admitió la demanda presentada por Yolanda Galeano, disponiendo su notificación tanto a Colpensiones como a la señora Rocío Pineda,

quienes una vez enteradas del escrito petitorio, procedieron a dar respuesta, así:

**Colpensiones**, presentó oposición a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que no existe certeza de la convivencia durante los 5 años anteriores al deceso del señor Orlando. Advierte que no le constan los hechos narrados. Propuso como excepciones de mérito, las de inexistencia de la obligación de reconocer sustitución pensional e intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas y, la innominada.

**Rocío Pineda**, admite la fecha de deceso del señor Orlando, la solicitud de reconocimiento de incrementos pensionales por parte de este frente a la señora Yolanda, el otorgamiento de los mismos mediante sentencia judicial y, la calidad de beneficiaria en salud de Yolanda respecto a Orlando, los demás supuestos no le constan o no son ciertos. Enfrentó las suplicas de la señora Yolanda, y formuló como excepciones tendientes a enervarlas, las de inexistencia de la obligación y prescripción.

La primera instancia culminó con **sentencia** proferida el 09 de febrero del año en curso, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito, en la que condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la señora Rocío Pineda de Piedrahita y María Yolanda Galeano Ceballos, en un porcentaje del 80% para la primera y un 20% para la segunda, a razón de catorce mesadas anuales, calculando el valor del retroactivo entre el 28 de enero de 2021 y el 31 de enero de 2023, en cuantía de \$21.643.353 para Rocío y \$ 5.412.338 para Yolanda. A partir del 1º de febrero de 2023, se les seguirá reconociendo

a cada una el 80% y 20% del salario mínimo legal mensual vigente, 14 mesadas al año, sin perjuicio de los aumentos de Ley. Autorizó el descuento a salud de los valores a cancelar por retroactivo, adicional a que dispuso la indexación de las sumas adeudadas. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses moratorios, e infundadas las demás. Absolvió de las restantes pretensiones y gravó con costas a cargo a la vencida.

Como sustento, manifestó el fallador que la normatividad aplicable al asunto, es la vigente al momento del fallecimiento del causante, esto es, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dejando claro que no se encontraba en discusión la causación del derecho, por estarse ante muerte de pensionado, y frente al requisito de convivencia, respecto de la cónyuge y la compañera permanente, indicó que a pesar de las contradicciones in que incurrieron los testigos en audiencia, no se desvirtuaba lo establecido en la investigación administrativa, por lo que era procedente reconocer la prestación a partir del deceso del pensionado, de acuerdo al tiempo de convivencia, en un 80% para la cónyuge y un 20% para la compañera, dejando claro que la jurisprudencia actual y reiterada de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, no exige para los cónyuges separados la pervivencia del vínculo, amistad, conversaciones, al ser un requisito no contemplado en la Ley.

Absolvió del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, disponiendo la indexación de las sumas adeudadas, autorizó la deducción de los aportes en salud del valor del retroactivo e impuso costas a la vencida.

Inconforme con la decisión el apoderado de Colpensiones, **formuló recurso de apelación**, indicando que para el caso, ni la señora Rocío ni Yolanda, acreditan los supuestos contemplados en la Ley para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes por la muerte del señor Orlando, esto es, 5 años de convivencia antes del deceso, en tanto, la cónyuge se había separado del causante desde el 2012 y la señora Yolanda, de acuerdo a las declaraciones brindadas en la audiencia no convivía con su compañero en los 2, 3 o 4 años, anteriores.

En lo desfavorable a Colpensiones también se conoce en el grado jurisdiccional de Consulta.

Del término **para presentar alegaciones** hizo uso **Colpensiones**, indicando que para el caso, pese a que el vínculo matrimonial entre el causante y la señora Rocío Pineda se encontraba vigente para la fecha del deceso, esto no es suficiente para reconocer el derecho pensional, en tanto, le correspondía acreditar una convivencia efectiva, real y material por el termino de 5 años anteriores al inicio de la unión marital que tuvo el mismo con la señora María Yolanda Galeano Ceballos, supuesto que no se advierte, así como tampoco se evidencia, que la señora Galeano hubiese estado unida con el señor Orlando en los cinco años anteriores a su deceso.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Como hechos debidamente acreditados en los autos se tienen que: la señora Rocío Pineda Castaño y Orlando de Jesús Piedrahita Hincapié, contrajeron matrimonio el 17 de julio de 1971, falleciendo este último el

28 de enero de 2021; que María Yolanda Galeano figuraba como beneficiaria en salud del señor Orlando, desde el 27 de junio de 2012; que en sentencia del 19 de julio de 2017, el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, declaró que al señor Orlando Piedrahita le asistía derecho al reconocimiento de los incrementos pensionales por su compañera permanente a cargo Yolanda Galeano Ceballos, desde el 05 de junio de 2012; que ante el deceso del señor Orlando se presentaron a reclamar la pensión de sobrevivientes la señora Rocío Pineda en calidad de cónyuge y Yolanda Galeano como compañera permanente, siendo resuelta de manera negativa en Resolución SUB143169 del 18 de junio de 2021, bajo el argumento que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, cuando existe controversia entre beneficiarios, la administradora se debe abstener de resolver dicho derecho, al ser competencia de la justicia ordinaria.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, el **problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si es dable el reconocimiento y pago de la partición reclamada en favor de la señora Rocío Pineda en calidad de cónyuge, al estar acreditado que no convivía con el causante para la fecha del deceso de este, así como en favor de la señora Yolanda Galeano, como compañera permanente del pensionado fallecido.

En ese orden de ideas, frente a la calidad de beneficiarias de las actoras, se tiene como criterio jurisprudencial decantado que la norma a observar para definir el derecho pensional es la vigente a la fecha del deceso del pensionado, para el caso, **28 de enero de 2021**, por lo que es aplicable el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003. Dicha preceptiva estipula como beneficiarios:

- a) *En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. **En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;***

Así, al no existir duda de la causación del derecho, al ser el fallecido pensionado por vejez (Resolución 022198-2004), queda por establecer el requisito de **convivencia no inferior a cinco años anteriores al deceso**, siendo este el **elemento material** que da derecho a la prestación, y el **lapso de cinco años de obligatoria acreditación** cuando de muerte de pensionado se trata, tal como se adoctrinó en sentencia SL1730 del 3 de junio del año 2020, donde revalida que el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, exige un tiempo mínimo de convivencia de 5 años *“pero únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del **pensionado, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, «convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes», por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión”***.

Precisándose por la jurisprudencia especializada frente a la convivencia, que esta tiene lugar cuando entre las personas en relación, existió un *«[...] vínculo dinámico y actuante de solidaridad y acompañamiento espiritual y económico»* (CSJ SL, 10 mayo 2005, radicación 24445), sustentado en *«[...] lazos afectivos, morales, de socorro y ayuda mutua»* (sentencia SL1576-2019), y frente al contenido material de la misma en sentencia SL1576-2019, se explicó que *«[...] la legislación y la jurisprudencia acogen el criterio material de convivencia efectiva como elemento fundamental para determinar quienes tienen la calidad de beneficiarios»*, basada en la demostración de *«[...] muestras reales y efectivas de la continuación de la vida común»*, siendo la prueba de este requisito, por un término no inferior a cinco años, esencial para



acreditar la condición de beneficiario de la sustitución pensional, exigiéndose para ello un mínimo probatorio, explicado en sentencia SL4050 de 2019, en los siguientes términos:

*"Por mínimo probatorio se entiende el nivel de convencimiento judicial, derivado de la valoración del conjunto de pruebas, que sirve para acreditar un hecho y tenerlo por cierto en un proceso judicial, para tomar una decisión respecto de las pretensiones o de las excepciones debatidas en el trámite jurisdiccional. Así pues, en el ejercicio de la función judicial, el juez formará su convencimiento al punto de encontrar demostrado el hecho en función de la disposición jurídica de la cual se derivarán los efectos, a partir de los postulados que informan el derecho a la prueba -artículo 29 de la Constitución Nacional- y conforme con la regla de juicio establecida, en el caso del procedimiento laboral, por el artículo 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.*

*Así pues, el estándar o mínimo estará determinado por el régimen normativo que sea aplicable a la situación jurídica que sirve de base a la controversia judicial.*

*En casos como este, la situación jurídica consistente en la causación de una pensión de sobrevivientes, está regida por las disposiciones positivas que constituyen el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuya dinámica normativa es el de la causación objetiva, es decir, que el reconocimiento de las prestaciones está condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada prestación. Es así como la pensión de sobrevivientes sólo será reconocida en la medida en que el pretendiente beneficiario demuestre el cumplimiento cabal de las exigencias normativas para tal efecto.*

*Así las cosas, en asuntos relacionados con la solicitud del reconocimiento de prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, como es el caso, se requerirá la observancia de un estándar probatorio de prueba necesaria... "*

No puede perderse de vista que, a partir de una interpretación armónica del inciso 3º del literal b) ya citado, se ha sostenido que, en caso de separación de hecho, la cónyuge no pierde el derecho pensional respecto del fallecido, sosteniendo la Corte que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años», puede ser acreditado **«en cualquier tiempo»**. Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de

*cujus*, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020), por lo que no resulta correcto sostener que el cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho, debe acreditar el requisito de convivencia en cualquier tiempo y, además, que los lazos afectivos, de solidaridad, de familiaridad, de apoyo y socorro, persistieron hasta el momento de fallecimiento del causante, en tanto, la jurisprudencia reciente y reiterada del órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, a partir de la SL5169-2019, ha sido enfática en establecer que de la normativa transcrita se colige que, la acreditación para el momento de la muerte de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b). Así en esta sentencia se indicó que:

*... la no existencia de lazos de afecto frente a una persona con la que convivió, pero que por alguna circunstancia ya no forma parte de su vida, no puede convertirse en una causal para negar un derecho, máxime cuando la ley a cuya interpretación se apela para tal desconocimiento, no contempla ese requisito. Incluso si estableciera como exigencia tal paradigma decimonónico, que sería absolutamente contrario a los principios de igualdad y de equidad de género que establece nuestro ordenamiento constitucional, se haría más imperiosa la necesidad de su adecuación judicial a través de la interpretación para ampliar las categorías de protección a aquellas situaciones que no contempla la norma.*

Luego, la cónyuge separada de hecho, "pero con vínculo matrimonial vigente, no tiene como carga demostrar la continuidad de los lazos familiares y afectivos, dado que no constituye esta circunstancia una exigencia legal prevista en el inciso 3.º del literal b) antes transcrito" (ver sentencias SL359-2021, SL966-2021,

SL1707-2021, SL2015-2021, SL2464-2021, SL4321-2021, SL5259-2021 y SL2257-2022)

De acuerdo con lo expuesto, analizado el material probatorio obrante en el expediente se tiene que, en la investigación administrativa realizada por Colpensiones, se concluyó:

**SI SE ACREDITÓ** el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por María Yolanda Galeano Ceballos, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.

De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se estableció que el señor Orlando de Jesús Piedrahita Hincapié y la señora María Yolanda Galeano Ceballos, convivieron en unión de hecho marital desde el 29 de noviembre del 2008 hasta el 28 de enero del 2021, fecha de fallecimiento del causante. Motivo por el cual se acredita la presente investigación administrativa.

Nota: Se presenta una separación de fuerza mayor un año previo al fallecimiento del causante, debido al trabajo del causante y la pandemia.

**NO. SE ACREDITÓ** el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por Rocío Pineda de Piedrahita, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.

De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, no se logró establecer que el señor Orlando De Jesús Piedrahita y la señora María Yolanda Galeano Ceballos, hubieran convivido los últimos 5 años de vida del causante y por el tiempo manifestado por la solicitante, desde el día 17 de julio de 1971 hasta el mes de agosto del 2012, fecha en que realizan separación de cuerpos sin restablecer convivencia, el causante fallece el 28 de enero del 2021.

- Existe contradicción en los tiempos de convivencia según las declaraciones de los familiares del causante, los testigos de campo y la declaración de la solicitante.

- La evidencia fotográfica aportada por la solicitante no confirma una línea de tiempo de convivencia.

- No es posible establecer una convivencia simultanea toda vez que la solicitante refiere que la separación se realiza en el año 2012 (8 años), pero los declarantes familiares y testigos de campo informan mas de 10 años de separación, generando contradicciones en los tiempos.

En la carpeta administrativa adosada por Colpensiones, se advierte transcripción de la audiencia llevada a cabo el 19 de julio de 2017, ante el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas, donde fue interrogado el señor Orlando de Jesús Piedrahita Hincapié, e indicó que era separado y que convivía con Yolanda hace un poco más de 7 años, lapso durante el cual no hubo separación. De igual forma se recibió la declaración de Juan Pablo Cardona Villada, quien afirmó conocer al señor Orlando hacía unos 20 años, y por ello constarle que vivía en unión libre con Yolanda hacia 7 años aproximadamente, tiempo en el

que no se presentó ruptura, supuesto que también confirmó Julio César Marín Velásquez, al informar que trababa con Orlando hacía más o menos 15 años, y que le constaba que vivía con Yolanda desde hacía unos 5 u 8 años.

Dentro de este trámite también se recibió el interrogatorio de **María Yolanda Galeano**, quien dijo que inició convivencia con el señor Orlando en el 2008 en el apartamento de un hermano de él, y al año se fueron a vivir al Peñol, lugar donde residieron hasta el 2020, año en el que Orlando se regresó a Medellín donde su hermana, dado que por su trabajo y por la pandemia, se le facilitaba estar en dicho Municipio, no obstante, cada vez que podían se visitaban.

**Raúl Andrés Montero Montoya**, afirmó conocer a Orlando desde hace aproximadamente 27 años, afianzando su amistad cuando él fue a trabajar al Municipio de El Peñol, hace aproximadamente 13 años, lugar en el que empezó a vivir hace 11 años. Que Orlando y Yolanda vivían juntos, que no sabe hace cuanto pero que él desde que frecuenta el pueblo los veía juntos, adicional a que los visitó en su lugar de residencia, y que, si bien Orlando para la fecha del deceso ya no estaba en El Peñol sino en Medellín, cree que fue por cuestiones de trabajo y pandemia, no obstante, la pareja se seguía frecuentando.

**Nora de Jesús Piedrahita Hincapié**, hermana del causante, afirmó que Orlando convivió con Rocío, mas o menos hasta que su nieta que en la actualidad tiene 13 años, contaba con 2 o 3 años, sin constarle para donde se fue a vivir después de que se separó de Rocío. Que Orlando llevó una vez a Yolanda a su casa y que cree que él vivía con ella en El Peñol, pero no sabe si para cuando falleció todavía estaban

juntos; que Orlando para la fecha del deceso vivía en su casa y antes había residido en un apartamento cerca, por aproximadamente 2 años.

**Luis Fernando Piedrahita Hincapié**, igualmente hermano de Orlando, afirmó que Rocío era la esposa de su Orlando, habiéndose realizado la ceremonia de matrimonio en 1971, siendo él pajecito; que conoció a Yolanda en el 2011 o 2012, porque fue a la finca donde vivía Orlando en Guarne; que sabe que su hermano se fue a vivir al Peñol con Yolanda, y que este en varias ocasiones lo llamó para que lo recogiera y lo trajera para su apartamento y luego se regresaba para donde Yolanda. Manifiesta que, en el 2012, Orlando vivió en un apartamento de su propiedad y luego llevó a Yolanda; que sabe que Yolanda y Orlando vivieron juntos por ratos, supuesto que se dio después de que ella lo visitó en Guarne, ignorando el tiempo que estuvieron juntos, así como si para la fecha del deceso todavía eran pareja; que antes de morir Orlando vivió en el apartamento de un sobrino cerca del lugar donde residían sus hermanas.

**María Fanny Flórez Rojas**, testimonia que conoció a Orlando por razones de profesión más o menos en el 2012 en El Peñol, trabajando juntos con posterioridad. Que salía con frecuencia a tomar tinto con Orlando y siempre llegaba su compañera Yolanda y se sentaba con ellos; que Orlando y Yolanda vivieron aproximadamente 12 a 13 años juntos, pues, para la data en que lo conoció ya eran pareja; que sabe que Orlando era separado y con hijos; que nunca llegó a visitar la casa de la pareja pero sabe que era por el barrio conquistadores; que no sabe la razón por la cual Orlando se fue a vivir a Medellín, pero él según le dijo Yolanda, iba y venía con frecuencia, cada mes más o menos o cuando lo permitía la pandemia, dado el pico y cédula.

En ese orden de ideas, concatenando los medios de convicción obrantes en el plenario ya examinados, documentales y testimoniales, a la luz de las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 61 del C. P. T. y de la S.S, dable resulta concluir que tanto la señora Yolanda como Rocío acreditaron el requisito de convivencia, la primera en los 5 años anteriores al deceso y la segunda durante tiempo superior a 5 años en cualquier época. Deducción a la que se llega frente a la señora Yolanda, en tanto, en la investigación administrativa se dejó establecido que la pareja convivió en unión marial del hecho desde el 29 de noviembre de 2008 hasta el 28 de enero de 2021, y que si bien se había presentado una separación un año previo a la muerte, ello obedeció a una fuerza mayor generada por la pandemia y el trabajo del señor Orlando, supuesto este último que confirman los testigos Raúl Andrés y María Fanny, debiéndose indicar que si bien no se desconoce que la fecha inicial de la convivencia que fue expuesta en la investigación, 2008, no se acredita con la prueba testimonial aportada, al no haber conocido los declarantes de manera presencial y directa la convivencia de la pareja en dicho años, también lo es que los testigos manifestaron conocer la unión a partir, aproximadamente, del 2011 o 2012, supuesto que concatenado con la sentencia del Juzgado de Pequeñas Causas donde reconoció los incrementos pensionales por compañera a cargo, así como la afiliación a salud, dan cuenta, por lo menos que dicha unión se dio por 10 años, tal y como lo estableció el a quo, sin mostrarse reparo frente a ello, por lo que se entiende superado con creces el requisito exigido por la norma para la compañera permanente, al haberse presentado el deceso en enero de 2021.

Y frente a la señora Rocío, baste indicar que el vínculo de la pareja iniciado en 1971, no tuvo liquidación ni disolución de sociedad conyugal y que, aunque desde el escrito de demanda se confiesa *que estuvieron*

*separados de hecho durante algún tiempo anterior a la muerte del pensionado*, lo cierto que es que se acredita la convivencia por 5 años en cualquier época al haber manifestado por la señora Dora Piedrahita, que su hermano estuvo con Rocío por lo menos hasta que su nieta tenía 2 o 3 años, y que en la actualidad cuenta con 13, esto es, haciendo aproximaciones mas o menos en el 2011, y el señor Luis Fernando precisa que Yolanda fue en el 2011 o 2012 a la casa de Orlando en Guarne, lugar donde él la conoció y que después de dicho encuentro fue que su hermano se fue a vivir con ella, afirmando con posterioridad en su declaración que en el 2012, Orlando vivió en un apartamento de su propiedad y que llevó a Yolanda, adicional a que en la investigación administrativa la señora Rocío adujo que se había separado en agosto de 2012, estableciéndose, pese a las imprecisiones, una convivencia por lo menos hasta dicha calenda, razón por la cual, al cumplirse los presupuestos establecidos por la Ley y la jurisprudencia especializada, procedente resulta la confirmación de la decisión en cuanto dispuso el reconocimiento y pago de la pensión para las señoras Rocío y Yolanda, en el porcentaje indicado en primera instancia, a partir del **28 de enero de 2021**, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y en razón a 14 mesadas al año, al tratarse de una sustitución pensional y no haber hecho aparición el fenómeno extintivo de la prescripción en los términos del artículo 151 del CPTSS en armonía con el artículo 488 del CST.

En el grado jurisdiccional de consulta se realizó el cálculo del retroactivo pensional, el cual arrojó suma similar a la liquidada por la primera instancia, luego, dable resulta confirmar la sentencia en dicho punto y en cuanto dispuso la deducción del valor de los aportes a salud y la indexación de cada una de las mesadas considerando su causación periódica, ello, ante la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y el

derecho de las actoras a percibir el monto real de lo debido, concepto que fue solicitado en la demanda por la señora Rocío y, si bien no se pidió por Yolanda, también lo es que este no tiene que ser rogado al no comportar esta una condena adicional, sino una garantía constitucional en los términos del artículo 53 Superior, tal y como ha sido reiterado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL359-2021, SL997-2021, SL1034-2021, SL1759-2021, SL4248-2022, SL4184-2022 y SL060-2023 entre otras.

Finalmente, es de indicar que **no hay lugar a imponer condena en costas** en primera instancia dado que ante la existencia de la controversia entre las beneficiarias, les era imperioso a la demandante y a la interviniente, acudir a la acción judicial a fin de que se definiera su derecho, tal y como lo establece el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, ***Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho,*** lo que ratifica el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008, por tal, acatando la entidad textualmente los preceptos legales, y careciendo de competencia para definir el asunto en la vía administrativa, no hay lugar a esta condena **razón por la cual se revoca la decisión en este apartado. En esta instancia tampoco se causan.**

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca el numeral octavo** de la sentencia proferida por el Juzgado



Diecinueve Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Rocío Pineda de Piedrahita**, en contra de **Colpensiones**, donde fue llamada como interviniente excluyente a la señora **María Yolanda Galeano Ceballos**, para en su lugar absolver a Colpensiones de las costas procesales. **En lo demás se confirma la decisión objeto de revisión.**

**Sin costas en esta instancia.**

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**

Rad.: 05001 3105 **019 2021 00305** 01  
Dte.: Rocío Pineda de Piedrahita  
Interviniente: María Yolanda Galeano Ceballos  
Ddo.: Colpensiones

AÑO	VALOR 100%	Numero de mesasdas	Vr. Mesada Rocio 80%	Vr. Mesada Yolanda 20%	Total adeudado Roció	Total adeudado Yolanda
2020	\$ 877.803		\$ 702.242	\$ 175.560,60	\$ -	\$ -
2021	\$ 908.526	\$ 13,1	\$ 726.821	\$ 181.705,20	\$ 9.521.352	\$ 2.380.338,12
2022	\$ 1.000.000	\$ 14	\$ 800.000	\$ 200.000,00	\$ 11.200.000	\$ 2.800.000,00
2023	\$ 1.160.000	\$ 1	\$ 928.000	\$ 232.000,00	\$ 928.000	\$ 232.000,00
TOTAL					\$ 21.649.352	\$ 5.412.338